SISTEMA REPRESENTATIVO Y SOBERANIA POPULAR EN LA REPUBLICA ARGENTINA

ENRIQUE V. ROCCA*

*Presidente de la Cámara Nacional Electoral de la República Argentina.

I) Si bien el 25 de Mayo de 1810 la Argentina se dio su primer gobierno propio y consolidó su independencia en 1816, no obstante la organización nacional no se logró sino muchos años después.

Mientras tanto los gobiernos se rigieron por reglamentos, asambleas, constituciones o proyectos y diversos tratados entre las provincias.

Pero debemos señalar que el sentido de unidad nacional se mantuvo siempre vivo, aún con luchas intestinas con ideas encontradas y con el sentido indómito de los caudillos federales.

La idea nacional privó permanentemente, pero la organización nacional recién llegó en 1853, y se concretó definitivamente en 1860 con la Constitución, que hombres ilustres sancionaron para que rigieran sus principios en nuestra patria.

Es con posterioridad a 1853, que nace el sistema representativo en forma orgánica, dictándose desde aquel entonces y hasta el día de hoy distintos sistemas electorales.

Quiero expresar que los pueblos latinoamericanos venimos haciendo un gran experimento; estamos ensayando el modo de goberarnos bien, el modo de tener gobiernos que entiendan debidamente nuestras necesidades y estimulen eficazmente el progreso de nuestra cultura mental, de nuestra riqueza económica y de nuestra libertad.

Felizmente la democracia, sostenida mediante medios legítimos electorales, se está afirmando en nuestro continente, y entendemos que se ha de consolidar definitivamente, para lo cual los gobernantes tienen que buscar soluciones de progreso y de justicia social en un clima de libertad.

II) La Nación Argentina ha adoptado para su gobierno la forma representativa según lo establece el artículo 1° de nuestra Ley Fundamental.

El sistema representativo lleva en sí, la determinación de que el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y demás autoridades creadas por nuestra Constitución, según lo determina el artículo 22.

III) El régimen electoral, su organización y ejecución, en la República Argentina, ha tenido muchas variantes, y lamentablemente, es necesario expresar, que la soberanía del pueblo, por medio del sufragio, no siempre se manifestó en una forma normal.

Desde las primeras leyes electorales, por distintos medios, no se pudo ejercer por los electores, con toda libertad, el derecho a elegir, ya que quienes concurrían al comicio lo hicieron en un bajo número, y la gran mayoría se abstenía de intervenir.

Eran los dirigentes políticos de los barrios los que se encargaban de llevar sus partidarios al comicio, se compraban votos, se volcaban urnas y demás vicios, que los cambios posteriores, la educación popular, la libertad de expresión y la lucha perseverante contra tales maniobras, se fue imponiendo.

Ya en 1866, a pocos años de la organización nacional, el vicepresidente de la Nación, don Marcos Paz, al abrir las sesiones del Congreso llamó la atención de los legisladores sobre el falseamiento del sufragio popular y dijo: "Cualquier medida o práctica abusiva que tienda a alejar a los ciudadanos de las urnas electorales para beneficio de otros grupos, es una evidente violación del principio fundamental de nuestra forma de gobierno. Desgraciadamente la violencia en unos casos y el fraude consuetudinario en otros, han traído a veces este

deplorable resultado, ocasionando así tan profunda preocupación en el sistema representativo, que casi puede decirse que se han desnaturalizado las funciones del pueblo elector en el orden político”.

Un maestro de nuestro derecho, el Doctor Nicolás Matienzo ha expresado, hace bastante más de medio siglo, que “El poder electoral de la República, estaba de hecho, en manos del Presidente de la Nación y de los gobernadores de provincia.”

El liderazgo de los hombres públicos tiene desde ya un gran ascendiente sobre los ciudadanos. Sin embargo en la actualidad algo a cambiado, debido a los grandes medios de información que tiene el pueblo, como la televisión, la radio, los diarios y revistas, donde se van exponiendo los altibajos de las distintas políticas, como asimismo las situaciones personales de cada candidato; y tales medios dan al pueblo una información más o menos suficiente, para que pueda llegar a una buena selección de los candidatos, que coincidan con sus intereses o con sus ideales.

Pero todavía, en nuestra opinión, el ciudadano no tiene una total libertad para elegir, sino tan sólo libertad de votar.

IV) Pasaremos ahora a considerar lo referente a las leyes aplicables a los partidos políticos, a las elecciones y a los organismos electorales.

En cuanto se refiere a estos últimos, debemos hacer notar que en distintos países de América la creación del organismo electoral pertinente se encuentra determinada en la propia Constitución de tales países.

Por ejemplo la Constitución de Costa Rica crea el Tribunal Supremo de Elecciones en el artículo 99 y contiene distintas disposiciones en el Capítulo III que abarca hasta el artículo 104.

Según los países la denominación de tal organismo tiene distinto nombre.

La constitución de El Salvador en el artículo 208 lo llama Consejo Central de Elecciones, y en el capítulo pertinente contiene varias determinaciones que comprenden a los artículos 209 y 210.

La República del Ecuador, reconoce constitucionalmente al Tribunal Supremo Electoral en el artículo 109.

La Constitución de la República Federativa del Brasil del año 1988 contiene toda una sección referida a los organismos de la Justicia Electoral que reconoce como cabeza al Tribunal Superior Electoral.

México, igualmente en el capítulo que trata sobre la soberanía nacional, que por supuesto reside esencial y originalmente en el pueblo, se refiere al Tribunal Electoral que tendrá la competencia y organización que determina la ley.

Como sabemos nuestra Constitución nada dice al respecto, y ello es natural por cuanto la importancia de los partidos políticos y la vigencia de los distintos sistemas electorales no fueron considerados, como no lo eran en casi ninguna parte, en la época de su sanción. Pero expresamente el artículo 33 reconoce la soberanía del pueblo.

Sería deseable, que en oportunidad de la proyectada reforma constitucional, se contemple la incorporación a su letra, del organismo electoral máximo que tiene el país, como elemento de afirmación democrática.

V) En nuestra Nación la instancia superior en el ámbito electoral, recién nace el Decreto no.7163 del 24 de julio de 1962, cuando se crea la Justicia Nacional Electoral y como cabeza de la misma se determina a la Cámara Nacional Electoral.

Los movimientos militares, y en este caso el de 1966, suprimió por ley 17.014 con fecha 10 de noviembre de 1966 la Cámara Nacional Electoral.

Años más tarde, en 1971, se recrea esta Cámara por ley 19.108, el 5 de julio de 1971, entonces como Sala Electoral, pero el 1º. de octubre del mismo año la ley 19.277, modifica la ley 19.108 y crea la Cámara Nacional Electoral.

En la actualidad no existen jueces exclusivamente electorales, pues por medio de la Secretaría Electoral de cada distrito los que deciden son los jueces nacionales de primera instancia en lo federal, a los que se les ha reconocido competencia electoral.

Aunque debe expresarse que el primitivo decreto 7163/62 establecía que en la Capital Federal y en cada capital de provincia habría un Juzgado Nacional Electoral. A tal efecto el único que se creó, funcionó en la capital de la provincia de Buenos Aires, pero no tuvo larga duración pues posteriormente fue suprimido por el movimiento militar.

V-b) Consideraremos ahora lo referente a nuestro organismo electoral.

Se ha estimado, con bastante criterio que la Cámara Nacional Electoral debería ampliarse en su composición de tres a cinco jueces, como fue el número con que se constituyó la Cámara primitiva.

Asimismo se hace necesario contar con un Procurador Fiscal Electoral para esta segunda instancia, ausencia muy lamentable en la actualidad, ya que es el mismo fiscal de primera instancia, quien actúa ante la Cámara.

Existen también proyectos en la Cámara de Diputados creando los juzgados exclusivamente electorales, en un caso para todos los distritos del país, o en otro proyecto, contemplando la necesidad de que ello ocurra en los distritos de mayor número de electores (provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Santa Fe, Córdoba y Mendoza). A mi entender ello se hace necesario por la importancia de la tarea y por la especialidad requerida para resolver las controversias que llegan a los juzgados. Lamentablemente hasta la fecha no se ha concretado tal aspiración, aduciendo razones de carácter económico.

VI) Yendo ahora a contemplar cómo se efectúan las elecciones, veremos que hoy, en la República Argentina, el Código Electoral Nacional y su reglamentación complementaria, dan una planificación, dirección y ejecución del proceso electoral cuya precisión es bastante cercana a lo ideal aunque, a criterio nuestro, debería modificarse en algunos aspectos, por ejemplo no permitir la boleta sábana y aplicar el sistema de sustituciones de candidatos con ello se afirmaría el sistema republicano de gobierno y se busca en toda forma el respeto a la soberanía del pueblo.

Podemos decir entonces, que si las leyes y decretos electorales son bastante buenos, en nuestra opinión no ocurre lo mismo con la ley 23.298 que regula la elección de los candidatos dentro de los partidos políticos, por varias razones. Una de ellas es la exclusividad de nominar los candidatos nada más que por medio de partidos políticos, eliminándose así el candidato independiente.

Como se sabe, existen personas de gran capacidad y honestidad que por una y otra causa no intervienen en la vida interna de los partidos políticos, porque en ciertas ocasiones el juego político que ahí se vive, no concuerda con sus íntimas convicciones. Ante ello y para no dejar al margen de la lucha electoral a personas de capacidad y honestidad admitidas por la ciudadanía, estimo la conveniencia de que puedan ser nominados también candidatos independientes. Además algunos artículos de esa ley deben contener mayor precisión, porque se originan distintas interpretaciones con su actual redacción.

VII) Para la cabal comprensión del sistema de organización electoral de la República Argentina -y consecuentemente de la forma en que se administra el proceso electoral- es conveniente recordar que esta Nación es un país federal, constituido por veintitrés estados provinciales autónomos -que se dan, a través de su respectiva constitución, sus propias instituciones- y que, además existe la ciudad de Buenos Aires como Capital Federal.

Cada una de las provincias y la Capital Federal constituyen a su vez, un "Distrito Electoral". El país se divide, así en veinticuatro distritos electorales.

Por su parte, las 23 provincias exhiben una organización institucional semejante a la nacional, con sus poderes ejecutivo, -ejercido por un gobernador-, legislativo -unicameral o bicameral, según los casos- y el judicial.

Como directa consecuencia de organización autónoma, cada provincia dicta su propia legislación electoral y establece sus propios órganos de aplicación en la materia.

Pero las elecciones de autoridades nacionales son regidas obviamente, por leyes nacionales y controladas por organismos también nacionales. A ellas nos referimos.

VIII) El sistema de organización electoral argentino es complejo y podría ser caracterizado como “mixto”, en el sentido de que, en la administración del proceso electoral nacional, intervienen organismos de distintos poderes del Estado.

Son los siguientes:

- La Justicia Nacional Electoral (fuero especializado del Poder Judicial, presidido por la Cámara Nacional Electoral).
- Las Juntas Electorales Nacionales (que se integran con magistrados judiciales y de breve duración en el momento electoral).
- La Dirección Nacional Electoral (que depende del Ministerio del Interior).

Y como organismos auxiliares:

- El Registro Nacional de las Personas.
- El servicio de Correos y Telecomunicaciones.
- El Comando General Electoral (que integran las Fuerzas Armadas y de seguridad para custodiar el comicio).

Pero debe destacarse que dentro de este sistema, es el Poder Judicial el que controla, en última instancia, el proceso electoral, y por tanto, es el actor principal.

Además, es la Justicia Nacional Electoral la que lleva el Registro de Electores y forma los padrones electorales.

Enumerar los distintos pasos del proceso electoral y los momentos de intervención de cada organismo, resultaría una larga disquisición. El detalle de los mismos en homenaje a la cuestión de fondo, sólo lo resumiremos.

En tal sentido, como hemos dicho, tanto en la planificación como en la ejecución del proceso electoral comparten responsabilidades de Justicia Electoral, las Juntas Electorales Nacionales, el Ministerio del Interior (a través de la Dirección Nacional Electoral), la empresa de Correos y Telecomunicaciones, el Registro Nacional de las Personas y el Comando General Electoral.

El Registro Nacional de las Personas debe velar por que todas las novedades relativas a los datos electorales de los ciudadanos producidas hasta 180 días antes del acto eleccionario sean comunicadas, a tiempo, a los jueces electorales, para que éstos a su vez puedan procesarlas e incluirlas oportunamente con el conjunto de la información que deben emitir a los organismos encargados de imprimir los padrones.

Los jueces electorales, forman, corrigen y hacen imprimir las listas provisionales y los padrones electorales. Les compete también confeccionar el mapa del distrito de su jurisdicción, formulando proyectos de demarcación de circuitos electorales (artículo 40) ordenar a los electores por orden alfabético y agrupar a los electores por mesas electorales, hasta 300 personas por mesa, considerando la proximidad de sus domicilios; determinar los lugares donde funcionarán las mesas receptoras (artículo 77).

Las Juntas Electorales comienzan sus tareas 60 días antes de la elección, y las concluyen con el escrutinio definitivo y proclamación de los electos.

Por su parte, deben designar las autoridades de dichas mesas y determinar la forma en que las mismas efectuarán el escrutinio (artículo 51); hacen llegar a los presidentes de mesas receptoras, por medio del servicio oficial de correos, los equipos y útiles electorales (urnas, formularios, sobres, etc.) que deben enviarles con la debida antelación el Ministerio del Interior a través de la Dirección Nacional Electoral (artículo 65).

Una de las misiones de la empresa de Correos es la distribución de las urnas y de la documentación electoral, así como el repliegue de dicho material, es decir, su recuperación de las mesas receptoras de votos (casi 80.000 en todo el país), una vez finalizado el escrutinio provisional en cada una de ellas para su entrega a las Juntas Electorales que deben practicar el escrutinio definitivo en cada distrito (artículos 65 y 104).

A la empresa de Correos, asimismo le compete, la transmisión de los resultados de los escrutinios provisionales por vía telegráfica a las Juntas Electorales, que son las que realizarán el escrutinio definitivo. También reúne en las cabeceras de distrito los resultados provisionales de las mesas, para su concentración final en el computador central del Palacio de Correos de la Capital Federal. En algunos casos, la información es recibida directamente por el computador central desde los mismos centros de votación.

Toda esta información es difundida, a partir de las 19 horas aproximadamente (una hora o algo más después de finalizado el acto eleccionario) a través del Ministerio del Interior. Los resultados, presentados por pantallas en video, se actualizan según ciclos de varios minutos de duración hasta las primeras horas del día siguiente, y son difundidos también mediante partes periódicos.

El Comando General Electoral Militar, finalmente, tiene la responsabilidad de la seguridad de los comicios.

La transmisión de los resultados, que se efectúa en el centro de cómputos, mediante los sistemas más actuales de computación, darán las cifras oficiales. Pero es de hacer notar -como ocurre en casi todos los países- que la radio y la televisión informan, con bastante anterioridad, al público, sobre los escrutinios en los distintos momentos de su desarrollo hasta llegar al resultado final provisional o estimativo. Estas cifras, si bien no son oficiales, informan, adelantándose en el tiempo en forma muy aproximada o muy semejante, al escrutinio que el centro de cómputos dará en forma oficial.

El resultado definitivo de la elección, será el que se dé más tarde por la Junta Electoral del distrito. Teniéndose en cuenta que durante las 48 horas siguientes a la elecciones las Juntas recibirán las protestas y reclamaciones sobre los vicios en la constitución y funcionamiento de las mesas, como también las reclamaciones que los partidos hagan sobre la elección.

Concluido el lapso de 48 horas la Junta Electoral Nacional realizará el escrutinio definitivo, examinando mesa por mesa donde se hayan denunciado irregularidades, la junta resolverá, y todas las resoluciones de la Junta son apelables ante la Cámara Nacional Electoral.

IX) Echaremos un rápido vistazo ahora, a los distintos sistemas electorales utilizados en la Argentina a partir de la vigencia de nuestra Constitución. Sintéticamente ha habido varios regímenes y diversos entre sí, que se han venido aplicando en nuestro proceso electoral.

La primera ley, la número 140 data de 1857 y aplica el sistema electoral de simple pluralidad de sufragios, o como suele llamarse "de lista completa". Como se sabe, resultan elegidos todos los candidatos que integran la lista que obtuvo mayor número de votos, excluyendo a las otras listas.

Es necesario expresar que la simple pluralidad de sufragios como sistema de elección se encuentra contemplado en nuestra Constitución Nacional (artículo 37 en la elección de Diputados).

El sistema de lista completa fue reiterado en distintas leyes posteriores a la número 140, lo que puede comprobarse con la lectura de la ley 207 de 1859, la ley 75 de 1863, la ley 623 de 1870, etc...

En el año 1903 se establece el régimen denominado de “circunscripciones uninominales”. Esa ley (la 4161) establece que tanto la Capital como las provincias deberán dividirse en circunscripciones electorales, y que se crearán tantas circunscripciones como número de diputados se elijan dentro de cada distrito, tomando como base el último censo que se haya realizado. De tal manera cada circunscripción elige un sólo diputado al Congreso. Este sistema tuvo poca duración, pero fue repetido en el año 1951.

En el año 1912 se cambia el régimen electoral mediante la denominada ley Sáenz Peña; que establece que las elecciones de diputados nacionales, de electores de senadores por la Capital, y de electores a Presidente y Vicepresidente de la República, se realizará por un sistema mediante el cual cada sufragante sólo podrá votar por las dos terceras partes del número de candidatos a elegir. Es la llamada lista incompleta. Mediante ella se pretende dar intervención a la minoría, que recoge así el tercio de los cargos en disputa. Pero debe hacerse notar que con dos tercios de votos en ambas Cámaras se puede reformar la Constitución.

Años más tarde, en 1957 y en 1962 se implanta el régimen proporcional tomando como base el sistema D’Hont. Y se ha mantenido hasta la fecha, en que se encuentra contemplado dentro del Código Electoral Nacional.

La última novedad, en regímenes electorales, la constituye la “Ley de lemas” que se ha aplicado en elecciones provinciales -no nacionales- recientemente, en nuestro país.

X) En cuanto a los partidos políticos, debo decir que no tuvieron una reglamentación específica, hasta el año 1931 en que se expide un decreto por el gobierno militar de entonces, que establece normas que, aunque no muy amplias, son sí precisas sobre diversos puntos que atañen a la conformación, y existencia de los partidos políticos.

Hay que señalar que por ejemplo las leyes 8871, 11.386 y 11.387 anteriores a 1931 y sus reglamentaciones, al conceder numerosos derechos a los partidos políticos y a los candidatos, no habían establecido normas para el reconocimiento o retiro de personería a los partidos. En este primer decreto a que aludimos, se sostiene que razones superiores de orden público indican que las autoridades federales no deben otorgar personería a agrupaciones que carezcan de significación popular o de organización permanente o de un programa gubernamental concreto, ni a las que propicien la disolución del Estado o utilicen medios ilícitos o contrarios a los principios republicanos. Este Estatuto tiene enunciados sobre el reconocimiento de los partidos, sobre los libros que deben llevar, sobre su contabilidad y formación de su tesoro partidario y sobre las elecciones internas para autoridades partidarias o candidatos a las elecciones nacionales. Castiga las infracciones a la Carta Orgánica partidaria y tiene disposiciones que llegan hasta el retiro de la personería.

Años después, en 1945, el gobierno militar de entonces designa una comisión de tres juristas para que proyecte una ley sobre los partidos políticos. Esta Comisión produce un trabajo muy complejo y muy detallado, de gran valor teórico, pero nunca entró en vigencia. Sin embargo sirvió como fuente ilustrativa para leyes posteriores.

En el año 1949 se promulga la ley 13.645 que establece las normas correspondientes a los partidos políticos, y que duró hasta el año 1955.

En 1955 el gobierno militar, esos días en el poder, dicta un nuevo Estatuto mediante el Decreto-ley 19.044.

En años sucesivos tanto por Decretos como por Decretos Leyes o por las Leyes de la Nación, se van modificando los Estatutos sobre partidos políticos hasta el actual que nace de la ley 23.298.

Esta ley, amén de garantizar a los ciudadanos el derecho de asociación política para agruparse en partidos políticos democráticos, establece que la misma es de orden público y que corresponde a la Justicia Federal con competencia electoral, y desde ya a la Cámara Nacional Electoral, el contralor de la vigencia efectiva de los

derechos, atributos, poderes, garantías y obligaciones, así como el de los distintos Registros que fija esta ley y también otras disposiciones legales.

Obliga a los partidos a solicitar su personería, a hacer su presentación ante el Juez Federal Electoral cumpliendo una serie de requisitos que se enumeran y son entre otros:

- a) Acta de fundación y constitución que acredite la adhesión de un número de electores no inferior al cuadro por mil del total de los inscriptos en el Registro Electoral del distrito correspondiente y hasta el máximo de un millón;
- b) Nombre adoptado por la Asamblea de fundación;
- c) Declaración de principios y programa;
- d) Carta Orgánica;
- e) Acta de designación de autoridades promotoras, las que convocarán a elecciones para constituir autoridades definitivas dentro del término de seis meses;
- f) Domicilio partidario y;
- g) Libros: de Inventario, de Caja, y de Actas y Resoluciones, además de un fichero de afiliados.

En vista de nuestro sistema Federal hace una distinción importante entre partidos de distrito y partidos nacionales.

Esta ley sólo se aplica a la elección de autoridades nacionales o las municipales de la Ciudad de Buenos Aires.

Establece disposiciones sobre el nombre partidario, la protección del mismo, y las designaciones que no puede contener, por ejemplo nombres de personas. Da también normas para la afiliación de los ciudadanos y fija quiénes no pueden ser afiliados, entre los que figuran los magistrados del Poder Judicial.

Establece un detalle bastante completo sobre la vida, obligaciones, etcétera del partido político; pero el renglón más interesante, desde el punto de vista del procedimiento ante la Justicia Electoral, es el que disponen los artículos del 55 al 71. Ahí se precisan normas de procedimiento tanto para el reconocimiento de la personalidad del partido como para el procedimiento contencioso cuando existen planteadas controversias.

XI) Teniendo en cuenta que en estos momentos se está tramitando un proyecto de reforma sobre la segunda parte de la Constitución Nacional referida a las autoridades de la Nación, entendemos que varios de los puntos expuestos públicamente traducen actualizaciones admisibles. Pero debe hacerse, considerando que la reforma constitucional refleje la supremacía del Derecho, es decir que sus tres Poderes sirvan y se asienten en un estado de derecho lo más perfecto posible, cuya utilidad sea para beneficio de la sociedad y mantenga una precisa racionalización del poder.

Por nuestra parte entendemos que debería acentuarse el contenido social, contemplando ahora solamente en el artículo 14 bis.

Ello me lleva a recordar un pensamiento que me honró un distinguido político colombiano y que me dedicó hace algunos años, el que decía: “Llevar la democracia política ya realizada y perpetuamente necesaria, al campo de la lluvia económica, es el problema fundamental de nuestra época”.

XII) Para terminar queremos decir que aprovechando la próxima reforma que pueda realizarse, sería muy interesante avanzar en el sentido de dar mayor participación popular en algunos actos de gobierno, estableciendo para ello la iniciativa y el Referéndum.

La iniciativa popular es la facultad que asiste a un determinado número de electores que propone una reforma de la Constitución, de una ley o una ordenanza municipal, exigiendo que la decisión se realice mediante el voto popular.

La iniciativa se parece al derecho de petición, pero va mucho más allá, puesto que mientras éste no pasa de ser una expresión de opinión, la iniciativa supone que ella debe tomarse en cuenta por el poder y someterse a votación popular.

El Referéndum por su parte, podemos definirlo como la ratificación o desaprobación de las leyes por el pueblo, y es la facultad del pueblo a participar en la actividad constitucional, legislativa o administrativa, aceptando o rechazando por medio del sufragio las resoluciones de uno o varios órganos constituyentes, legislativos o administrativos. En resumen el Referéndum es una consulta que se hace al pueblo acerca de un asunto de interés general.

Es indudable que incorporando a la reforma, estas dos instituciones se avanzaría bastante en el ejercicio de la democracia teniéndose a una mayor participación popular en las cuestiones de interés general.

XIII) Debemos también tener en cuenta que hay que superar cierto descreimiento existente en los ciudadanos respecto del Parlamento y aún del Poder Ejecutivo en cuanto no se da a veces cumpliendo a las promesas electorales.

Tal situación debe remediarse sin llegar por ello a lo que se denomina el mandato imperativo.

Como solución intermedia hace ya algunos años, por mi parte estructuré y elevé un proyecto de ley, donde se establecía que, ante cada elección junto con los puntos de los enunciados de la plataforma electoral y para el caso de que su vigencia debiera ser contemplada por ley, los partidos o los candidatos deberían acompañar con el punto de dicha plataforma o promesa electoral, un proyecto de ley donde se determinaría en forma precisa cómo se realizaría el tema prometido, con indicación de los recursos financieros que insumiría, determinándose por supuesto cómo se obtendrían tales recursos y considerando la incidencia de los presumibles gastos dentro del presupuesto general de la Nación. Con ello se tendría la certeza o posibilidad del cumplimiento de las promesas electorales.

Ahora bien, esos proyectos (el del partido o candidatos triunfantes en la elección) deberían ser girados al Congreso de la Nación para que el permiso los tratara, con toda libertad, de tal manera que dependería del Poder Legislativo hacerlos ley, o rechazarlos o modificarlos. Pero el candidato o partido, habría cumplido su promesa electoral, pero respetando el sistema de nuestra Constitución.

XIV) Finalmente hay que recordar las palabras del eminente profesor Montes de Oca referidas a nuestra Carta Magna: “La constitución Argentina ha organizado un gobierno con facultades limitadas. La omnipotencia del Estado no existe ya que el mundo civilizado. Las limitaciones que impone nuestra Constitución son de orden distinto: una es, por razón de los derechos y garantías que reconoce a los individuos; otra, por razón de la autonomía que reconoce a las provincias que constituyen la Nación. El pueblo al delegar en el gobierno parte de los derechos que representan su soberanía, se ha reservado algunos para sí; algunos han conferido a las autoridades de provincia y otros al poder central de la Nación. Son aquellos derechos los que constituyen la personalidad del hombre y que se ha reservado el pueblo de la República, para ser ejercido individualmente por las personas que lo forman, los cuales están legislados en la primera parte de la Constitución Nacional”. (por ejemplo del artículo 14 en adelante y artículo 33)

Y, Joaquín V. González, en su Manual expresa: “No debe olvidarse que es la Constitución un legado de sacrificios y de glorias, consagrado por nuestros mayores a nosotros y a los siglos por venir; que ella dio cuerpo y alma a nuestra Patria hasta entonces informe, y que como se ama la tierra nativa y el hogar de las virtudes tradicionales, debe amarse la Carta que nos engrandece y nos convierte en fortaleza inaccesible a la anarquía y al despotismo.”